

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05 001 31 05 019 2017 00496 00, promovido por el señor **CARLOS ALBERTO VANEGAS CARRILLO** en contra de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, al cual fue vinculada en calidad de Litis Consorte Necesario por pasiva la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN – PROTECCIÓN S.A.**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de Colpensiones frente a la sentencia emitida el 9 de agosto de 2019 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, y revisar en consulta la misma providencia en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **120**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo demandó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y a Colpensiones pretendiendo se declare la nulidad y/o traslado de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y como consecuencia, se disponga el restablecimiento de su afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones sin solución de continuidad. Se condene a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a pagar a Colpensiones a título de perjuicios el cálculo actuarial necesario para que le sea reconocida y pagada la pensión de vejez bajo los parámetros del RPMPD por ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Se condene a las codemandadas de manera individual, solidaria o conjunta a cancelar el retroactivo pensional causado entre el 16 de febrero de 2014 y el 15 de febrero de 2016, los intereses moratorios o en subsidio la indexación sobre dicho retroactivo, la reliquidación de la pensión de vejez con el IBL que le resulte más favorable y aplicando una tasa reemplazo del 90% y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso, que nació el 16 de febrero de 1954. Estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Se trasladó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Aduce que el fondo privado no se tomó el trabajo de explicarle las consecuencias de su traslado al RAIS. Cuando cumplió 56 años de edad solicitó ante la AFP el traslado a Colpensiones, mismo que le fue negado por estar a menos de 10 años de cumplir la edad mínima. No obstante, dicho traslado fue aceptado mediante sentencia de tutela de 19 de agosto de 2010, proferida por el Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín. Agrega que Colpensiones le negó el reconocimiento y pago de pensión de vejez por medio de la resolución GNR 325873 de 2015, aduciendo que no era beneficiario del régimen de transición y, por ende, debía esperar el cumplimiento de los 62 años de edad. El 17 de febrero de 2016 solicitó nuevamente la

prestación y a través de la resolución GNR 134924 de 2016 le fue concedida bajo lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, precisando que por haberse trasladado al RAIS y retornar al RPMPD no conservaba el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En sentencia proferida el 9 de agosto de 2019, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, declaró la ineficacia del traslado del señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad entendiéndose que el demandante ha estado afiliado válidamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones, y condenó a Colpensiones a reconocer y pagar al señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo: la suma de \$1.073.693 por concepto de reajuste de la pensión de vejez, causado entre el 16 de febrero de 2016 y el 30 de julio de 2019; la suma de \$15.848.883 por retroactivo pensional causado desde el 1° de mayo de 2014 hasta el 15 de febrero de 2016 y la indexación de las condenas. Autorizó a Colpensiones para descontar los aportes en salud del retroactivo pensional reconocido. Absolvió a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. de las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a Protección.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de Colpensiones no comparte la decisión de primera instancia. Primero, porque el traslado realizado por el demandante del RPMPD al RAIS fue un acto voluntario y libre de apremio y no incurrió en ninguna prohibición legal. Segundo, porque su voluntad de permanecer al RAIS se reafirmó con la densidad de semanas cotizadas con posterioridad a su afiliación a la AFP. Tercero, porque para la fecha del traslado de régimen, los fondos privados no tenían la obligatoriedad de brindar la información en los términos que plantea la parte actora, pues dicha obligatoriedad fue prevista solamente a partir de la creación del Sistema de Información al Consumidor Financiero con la Ley que reformó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Cuarto, porque su representada le reconoció la pensión de vejez al señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo mediante la resolución GNR 134924 de 5 de mayo de 2016 en aplicación del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pues con fundamento en las sentencias SU-062 de 2010, SU-

130 y SU-853 de 2013, el citado demandante no colma el requisito de los 15 años de servicio o las 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que no conserva el régimen de transición.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones alegó dentro del término legal escrito de alegatos de conclusión, precisando que la sentencia de primera instancia viola directamente la Constitución Política de Colombia en su artículo 48, pues la declaratoria de ineficacia de traslado desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, poniendo en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados, toda vez que este tipo de decisiones generan un gran impacto fiscal traducido en la descapitalización del RPMPD. Agrega que en en sentencias como la SU-130 de 2013, C-789 de 2002 y C-1024 de 2004 se ha establecido que “...*solo las personas que sean beneficiarias del régimen de transición por tiempo de servicios cotizados al 01/04/1994, podrán trasladarse al RPM en cualquier tiempo...*”, y solicita que la AFP devuelva la totalidad de los valores que haya recibido en razón de la afiliación del demandante, incluyendo las cuotas de administración y las sumas de los seguros previsionales.

La apoderada de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. presentó de manera oportuna escrito de alegatos de conclusión solicitando que se confirme la sentencia de primera instancia en cuanto absolvió a su representada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia, consiste en determinar si el traslado entre administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, efectuado por el actor se torna ineficaz como lo precisó la Juzgadora de primera instancia, entendiéndose que el accionante ha estado afiliado válidamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones, y en caso afirmativo, se abordará como problemas jurídicos asociados establecer si ha

operado el fenómeno extintivo de la prescripción, así como definir las restituciones a que haya lugar entre entidades pensionales y si de ser procedente la referida ineficacia, debe condenarse a Colpensiones a reconocer y pagar el reajuste y el retroactivo pensional, debidamente indexados, en favor del accionante por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES

Preliminarmente se hace imperioso precisar, que dado el problema jurídico antes expresado, no se abordará el asunto bajo los postulados de las sentencias SU-062 de 2010 y SU -130 de 2013 que predicen que cuando el afiliado cuenta con más de quince años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994, por mandato de la Ley no quedó excluido del régimen de transición por trasladarse al RAIS, pudiendo regresar en cualquier tiempo al RPMPD con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, sino bajo los presupuestos de la ineficacia de la afiliación.

Ahora, esta Sala se acoge al precedente jurisprudencial pacífico, que en temas en un principio de nulidad y posteriormente de ineficacia, ha desarrollado la Honorable Corte Suprema de Justicia con ya 13 años de desarrollo, esto es, desde las sentencias 31989 y 31214 de 2008, cuando se analizó la situación que nos convoca bajo la óptica de la *nulidad del acto jurídico*, situación que cambió en cuanto a su consecuencia jurídica a partir de la sentencia SL 12136 de 2014, donde se abordó la *ineficacia*.

La figura de la ineficacia, en materia de elección de un fondo pensional, tiene su sustento en la parte final del inciso primero del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, cuando hace referencia al hecho que si por cualquier forma se atenta contra el derecho a la afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se dejará sin efecto la afiliación respectiva.

Según se desprende de los fundamentos fácticos de la acción, se duele la parte actora de la omisión por parte de Protección y de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., del deber de información, por tanto, se hace necesario abordar bajo tal óptica la situación del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad proveniente del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, llevado a cabo el 19 de noviembre de 1997.

Respecto a la información que deben brindar los fondos de pensiones a quienes pretenden captar como sus afiliados, es importante tener en cuenta que el mismo no tiene como fuente primigenia la llamada ley de doble asesoría 1748 del 2014, con su decreto Reglamentario 2071 de 2015, pues dicha obligación existe desde el estatuto orgánico del sistema financiero, Decreto 663 de 1993 en su artículo 97, al igual que el Decreto 720 de 1994 en sus artículos 10 y 12, que determina que la información suministrada debe ser suficiente, amplia y oportuna, trasladando además las responsabilidades del asesor de los fondos pensionales a las entidades que representan, motivo por el cual esta Sala de Decisión no comparte el planteamiento esbozado por Colpensiones, cuando indica que no es viable imponer a los fondos privados obligaciones distintas a las que se consagraban en la normatividad vigente para el momento del traslado del demandante.

Es importante precisar que, al tratarse de la multicitada figura de la *ineficacia*, esta no es susceptible de saneamiento, a más que lo se pretende es dejar sin efectos el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, esto es, el acto jurídico realizado por el asegurado el 19 de noviembre del 1997 ante Protección, por tanto, el estudio debe centrarse exclusivamente al cumplimiento o no del deber de información de dicho momento lo cual tiene su sustento en la sentencia SL 1688 de 2019, que como su referente lo indica proviene de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

El análisis del tema pensional, bajo la perspectiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, es un tema complejo, pues refiere múltiples aspectos y variables como lo son la forma de liquidación de las prestaciones en el caso que el afiliado tenga o no beneficiarios, los capitales requeridos para pensión ordinaria o anticipada, las condiciones de la garantía de pensión mínima, las modalidades

de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, la forma en general como se financia la prestación, la incidencia de las fluctuaciones de los mercados en cada cuenta de ahorro individual, y en general, en principio, más que un comparativo de los montos pensionales o que la pensión depende de los ahorros de la cuenta respectiva, sus diferentes aspectos de un régimen frente al otro, situaciones estas básicas que son comprendidas dentro de los mandatos del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 que disponía para el momento del traslado del actor: “Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicios claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado” y, por su parte, el Decreto 720 de 1994 en su artículo 12, cuyo texto preceptúa: “...Obligación de los promotores. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado...”, lo que la Honorable Corte Suprema de Justicia delimitó como un primer momento frente al deber de información.

Dado el anterior precedente, es claro para la Sala de Decisión, que al señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo, no se le suministró la información de la forma que ha determinado nuestro máximo órgano de cierre jurisdiccional, o al menos no obra como una verdad procesal, pues la única referencia que se tiene al respecto es lo narrado por el actor en el interrogatorio de parte, donde advierte que se trasladó a Protección cuando trabajaba en ACCECO – Accesorios de Colombia, pues estando en su jornada laboral, el personal es llamado porque una asesora comercial había ido a las instalaciones “...*para ver si nos trasladábamos de cesantías y pensiones y cuando me tocó a mí, yo le dije que yo de pensiones no me trasladaba porque yo llevaba mucho tiempo cotizándole al Seguro y que si se pasaba era solamente para las cesantías...*”. Que firmó el documento y fue con posterioridad que se da cuenta que estaba afiliado en pensiones y cesantías al fondo privado. Que firmó los documentos sin leer previamente el contenido de los mismos. Que desconoce

cómo fue su afiliación a Porvenir, dado que estuvo por varios empleos y no tenía conocimiento de como realizaban las afiliaciones, sin embargo, conoció de su vinculación a Porvenir cuando inició las averiguaciones del tiempo que le faltaba y por citación de la AFP.

Para definir lo anterior, se hace imperioso determinar a quién corresponde la carga de la prueba de la omisión total o parcial al deber de información al momento de la afiliación o traslado, y en dicho sentido la Sala acoge el precedente reiterado de la inversión de la carga de la prueba, con fundamento en las Sentencias SL 1.452 y SL 1.688 de 2019 donde la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, explicó, que en los procesos en los cuales se controvierte la eficacia del traslado entre regímenes pensionales, la demostración del consentimiento informado es el que tiene la virtud de generar la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez; “...si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó...”.

Según la Alta Corporación mencionada, la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia “...en virtud de la cual no es dable exigir a quien está en una posición probatoria complicada –cuando no imposible- o de desventaja, el esclarecimiento de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar. En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento...”.

Conforme al criterio expuesto, lo afirmado en un formulario de traslado de régimen pensional acerca de la selección libre y voluntaria de régimen por parte de un afiliado, no puede calificarse como tal si éste no recibe información veraz, oportuna, clara, comprensible y completa sobre los alcances de dicha decisión, ni el traslado se convalida en fecha posterior con la simple firma de otro formato o con la sola presentación de un cálculo actuarial, considerando el cambio sensible que ese acto jurídico genera en el derecho pensional de los afiliados al sistema, y considerando que el acto del cual se estudia la ineficacia es el de traslado de régimen.

Además, el deber de información a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones no es un privilegio de quienes se benefician del Régimen de Transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (véase sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1452 de 2019 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia), porque el ordenamiento constitucional y legal colombiano no hace esa distinción, a más que las razones expuestas por la Corte Suprema de Justicia tienen aplicabilidad tanto para beneficiarios como no del régimen de transición.

A juicio de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, “...no se trata únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición...” (Sentencias SL 19.447 de 2017 y SL 1.452 y SL 1.688 de 2019), lo que significa que la firma del formulario no es suficiente para agotar el deber de información a cargo de la Administradora de Fondos de Pensiones que pretende captar un afiliado.

Esta Sala acoge el planteamiento, en la medida que se encuentran dados los presupuestos legales y jurisprudenciales para que proceda la declaratoria de ineficacia petitionada. Además, ninguna prueba en el plenario permite establecer que el traslado al régimen de ahorro individual por parte del asegurado a Protección y su posterior vinculación a la Sociedad Administradora de Fondos de

Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., se hubiese realizado bajo los parámetros de libertad informada y transparencia mínimos.

Precisa la Sala, que las consecuencias de la declaratoria de la ineficacia, conllevan que se impongan las restituciones, las cuales implican el traslado de la totalidad de los aportes existentes en la cuenta de ahorro individual del demandante con los rendimientos generados por éstos en cada uno de los Fondos Privados, así como los descuentos efectuados para garantía de pensión mínima, gastos o cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora, los cuales deben asumir las AFP con cargo a sus propios recursos, por los periodos durante los cuales el accionante permaneció afiliado a aquellas, a la administradora cuya afiliación es válida, y en caso de que no se hubiera hecho (Corte Constitucional, Sentencia C-1024 de 2004, y Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sentencias SL4.964 de 2018, SL4.989 de 2018, SL1.421 de 2019 y SL1.688 de 2019).

Acorde con la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la administradora debe devolver al sistema la totalidad de los valores que haya recibido en razón de la afiliación, “...como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado...”. En tanto que “...al haber sido una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C...” (Sentencia de 8 de septiembre de 2008, Radicado 31.989), postura esta que justifica la orden de devolución no solo de las cuotas de administración, sino además de las sumas que hayan sido destinadas al pago de los seguros previsionales, así como se indica estos hayan sido entregados por la AFP a una aseguradora, evento en el cual debe

ser asumido su reintegro por la respectiva Administradora de Fondo de Pensiones.

Es importante relieves como la Honorable Corte Suprema de Justicia, en su Sala Laboral, en la sentencia SL2877-2020, radicación 78667 del 20 de julio, se refirió reciente y puntualmente al tema de las cuotas de administración, al siguiente tenor:

“...De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub-lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional...”.

En consecuencia, se adicionará en este punto la providencia.

En el sentido antes mencionado, esta Sala de Decisión, acoge la línea jurisprudencial de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en lo relacionado con los reintegros que tendrá que hacer la administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, con destino a Colpensiones una vez declarada la ineficacia, pues las equivalencias ente uno y otro régimen no tiene por qué asumirla un afiliado frente al cual se han realizado cotizaciones en la forma dispuesta por ley, y de modo alguno puede trasladársele el detrimento en sus

cotizaciones bien sea por el transcurso del tiempo, ora por deducción por concepto de cuotas de administración, para el fondo de garantía de pensión mínima y/o seguros previsionales, los cuales por lo antes expuesto debe asumirla la administradora del RAIS con cargo a su propio patrimonio. Tampoco es procedente que sea el administrador, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, quien asuma los deterioros por cualquier causa de las cotizaciones de los afiliados, pues la ineficacia se causa por la conducta de la AFP privada, dada la omisión del deber de información que le incumbe.

Adicionalmente, se debe anotar que la regla del artículo 1746 del Código Civil no se limita al caso de pérdidas o deterioros, la misma es una previsión legal adicional a las restituciones a que hubiese legal, y es por ello que se reitera, esta Sala acoge en las restituciones las reglas pacíficas al respecto dictadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia en las anteriores referencias de esta providencia, para lo cual además no puede perderse del horizonte que los rendimientos son generados por un capital aportado a título de cotizaciones del trabajador y su empleador.

No se comparte por parte de esta Sala de Decisión la postura de Colpensiones cuando alega que la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, porque la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia ha precisado que el efecto de la declaratoria de la ineficacia es retrotraer la situación al estado en que se hallarían si el acto no hubiese existido jamás, es decir, la sentencia que en tal sentido se dicta, tiene efectos retroactivos, lo que implica privar de todo efecto práctico el traslado, esto es, se entiende que el asegurado siempre estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por la entidad cuya afiliación es válida. Que el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular, ello, teniendo en cuenta que la devolución de todos los recursos acumulados en

la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Lo cual incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a títulos de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional (Sentencias SL 2877 de 29 de julio de 2020, Radicado 78.677 y SL 2914 de 22 de julio de 2020, Radicado 83.085).

Ahora bien, se debe ocupar la Sala del análisis de la excepción de mérito de prescripción, la cual fue alegada por las codemandadas. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que desde la existencia del Tribunal Supremo del Trabajo la jurisprudencia ha sostenido de manera invariable que el derecho a la pensión en sí mismo no prescribe, por ser una prestación social cuyo disfrute obedece al hecho de ser de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, empero prescriben las mesadas o los reajustes pensionales exigibles que no se hubiesen cobrado por su beneficiario dentro del lapso trienal previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (sentencias de 18 de diciembre de 1954; y 18 de febrero de 2005, Radicado 21.378).

Además, en la Sentencia SL 68.838 de 8 de mayo de 2019, la Sala de Casación Laboral explicó: **i)** que la acción de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, como también lo es el derecho ciudadano a reivindicar en cualquier tiempo un derecho pensional, o a mejorar su prestación; **ii)** que el análisis de la prescripción no puede realizarse de forma aislada y desconectada de los derechos que pretenden reivindicarse a través de su reconocimiento; **iii)** que los hechos o estados jurídicos no prescriben, “a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que surjan de ello”; y **iv)** que esta última tesis cobra más sentido en relación con la pretensión de “ineficacia”, porque la sentencia que la declara, en realidad lo que hace es comprobar o constatar un estado de cosas surgido con anterioridad al inicio de la Litis.

Igualmente, en la sentencia SL 4609 del 6 de octubre de 2021, se expuso por parte de nuestro máximo órgano jurisdiccional del cierre de la justicia ordinaria, lo siguiente:

“...En relación con la excepción de prescripción aducida por Colpensiones si bien los artículos 488 del CST y 151 CPTSS son los que regulan dicho fenómeno extintivo, por virtud del cual opera el termino trienal, contabilizado desde la exigibilidad de la obligación, no obstante, dado que en este tipo de procesos las pretensiones de la demanda tienen carácter declarativo, es decir, están referidas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estadio jurídico, acaecido con anterioridad a que se trabé la litis, la sala considera que la acción de ineficacia del traslado entre los regímenes pensionales es imprescriptible, tal como se ha sostenido, entre muchas otras, en las sentencias CSJ SL1688-2019; CSJ SL 12715-2014; CSJ SL 28479,4 de jun. 2028, CSJ SL 39347 y CSJ SL 8397, 5 Jul. 1996...”

De lo anterior se concluye, entonces, que no ha operado plazo extintivo alguno frente a la acción que dio origen al proceso, y tampoco prospera la excepción de prescripción de la acción de nulidad del acto jurídico propuesta, se reitera, por encontrarse en estudio el tema bajo los presupuestos de la ineficacia.

A CONTINUACIÓN, SE EXAMINA LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA RELIQUIDACIÓN Y DEL RETROACTIVO PENSIONAL RECLAMADOS EN LA DEMANDA:

Examinada en conjunto la prueba documental obrante en el expediente la Sala encuentra: i) Que el señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo nació el 16 de febrero de 1954. (ii) Que se afilió al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones el 11 de agosto de 1975, y ha efectuado aportes de manera discontinua con empleadores particulares hasta el 31 de mayo de 2014, para un total de 1.477 semanas. iii) Que el actor se trasladó a Protección el 19 de noviembre de 1997. iv) Que posteriormente se trasladó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. el 3 de diciembre de 2001. (v) Que el Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento mediante sentencia de tutela proferida el 19 de agosto de 2010 tuteló los

derechos invocados por el accionante Carlos Alberto Vanegas Carrillo y le ordenó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. proceder a aceptar nuevamente al mencionado quien tiene el derecho a pensionarse dentro del RPMPD. (vi) Que 18 de julio de 2011, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. efectuó el pago del traslado de aportes por valor de \$16.912.617,08. (vii) Que el 12 de junio de 2015, el actor reclamó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y la entidad por medio de la Resolución GNR 325873 de 22 de octubre de 2015 se la negó con el argumento de que no acredita 15 años de servicios al 1° de abril de 1994 por lo que no conserva el régimen de transición y que, si bien acredita 1.469 semanas, no cuenta con la edad mínima de 62 años. (viii) Que solicitó nuevamente la prestación el 17 de febrero de 2016, misma que le fue concedida en la Resolución GNR 134924 de 5 de mayo de 2016 con fundamento en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, a partir del 16 de febrero de 2016, en cuantía de \$689.455, teniendo en cuenta para ello 1.471 semanas, un ingreso base de liquidación de \$807.518 que al aplicarle una tasa de reemplazo del 69.41%, arrojó una mesada pensional de \$560.498, prestación que se ingresaría en la nómina de mayo de 2016, pagadera en el mes siguiente. (ix) Que el accionante el 31 de octubre de 2016, reclamó la reliquidación de la pensión de vejez y Colpensiones se la negó a través de la Resolución GNR 335168 de 11 de noviembre de 2016.

DE LA RELIQUIDACIÓN PENSIONAL

El documento de identidad que obra en el expediente, da fe que el señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo nació el 16 de febrero de 1954, tenía 40 años de edad el 1° de abril de 1994 cuando entró en vigencia en el sector privado el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, o sea, que es beneficiario, en principio, del régimen de transición previsto en el artículo 36 de esta normatividad, que conservó la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas de cotización y el monto de la pensión por vejez establecidos en el régimen anterior, a favor de tres categorías de trabajadores: los hombres con cuarenta o más años de edad, las mujeres con treinta y cinco o más años de edad,

y unos y otras que independientemente de su edad tuviesen quince o más años de servicios cotizados.

El régimen anterior al cual se hallaba afiliado el accionante, era el contenido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de la misma anualidad, que para acceder a la pensión por vejez exigía sesenta o más años de edad a los hombres o cincuenta y cinco o más años de edad a las mujeres, y un número de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado 1.000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.

Adicionalmente, el Parágrafo Transitorio 4° del Acto Legislativo 001 de 2005 expedido el 25 de julio del mismo año, instituyó el 31 de julio de 2010 como límite para la vigencia del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, y demás normas que lo desarrollan, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen tuviesen cotizadas, al menos, 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, a los cuales se les mantuvo tal régimen hasta el año 2014.

La documentación que obra en el expediente da cuenta que a la vigencia del acto legislativo referido el demandante tenía aportadas 1.067 semanas, que le permitían conservar el régimen de transición hasta el 2014. Que cotizó hasta el 31 de mayo de 2014 y durante toda su vida laboral un total de 1.477 semanas, de las cuales 967 semanas corresponden a los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, corridos entre el 16 de febrero de 1994 y la misma fecha de 2014, razón por la cual consolidó su derecho a la pensión por vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990.

Luego, el 1° de abril de 1994, cuando entró en vigencia en el sector privado el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, al asegurado le faltaban más de diez años para adquirir el derecho a la pensión por vejez, en consecuencia, el Ingreso Base de Liquidación de éste debe integrarse en los términos del artículo 21 de dicha Ley, como lo han explicado la Corte Constitucional en la Sentencia T-1.225 de 5 de diciembre de 2008, y la Sala de

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las Sentencias de 1° de marzo de 2011, radicado 40.552; 22 de enero de 2013, Radicado 37.246; y 17 de julio de 2013, Radicado 45.712, entre otras.

La norma aludida, en armonía con el artículo 46 del Decreto 692 de 1994, le brinda la posibilidad al afiliado de conformar el Ingreso Base de Liquidación de la pensión por vejez con el promedio de los salarios o rentas mensuales de los últimos diez años de cotización o a su equivalente en número de semanas sobre las cuales se cotizó efectivamente, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, o con el ingreso base de toda la vida laboral cuando éste resulte superior, siempre y cuando haya cotizado como mínimo 1.250 semanas.

En consecuencia, el Ingreso Base de Liquidación de la pensión por vejez reconocida en este caso debe integrarse en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, o sea, con el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó el actor durante los diez años anteriores al reconocimiento de la prestación, porque el asegurado aportó un número inferior a las 1.250 semanas, y aplicando una tasa de reemplazo del 75% prevista en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de la misma anualidad.

Establecido en este juicio que el demandante consolidó su derecho pensional con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 del mismo año, y toda vez que acredita un número superior a las 1.250 semanas, le asiste derecho conforme el artículo 20 de la norma referida a una tasa de reemplazo del 90% aplicable al Ingreso Base de Liquidación.

La parte actora no presenta inconformidad con el Ingreso Base de Liquidación, reconocido por Colpensiones en la Resolución GNR 134924 de 5 de mayo de 2016 que asciende a \$807.518. Por ende, aplicando a dicho valor una tasa de reemplazo del 90%, arroja una mesada pensional de \$726.766, para 2016. Superior a la liquidada por Colpensiones en el acto administrativo referido que

fue de \$560.498 reajustada al salario mínimo legal mensual vigente equivalente a \$689.455.

En consecuencia, le asiste derecho al accionante al reajuste pensional deprecado.

DEL RETROACTIVO PENSIONAL

Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida se le aplican las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en dicha Ley.

Los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, contentivo del Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, prevén que la pensión por vejez se reconoce a solicitud de parte interesada una vez colmados los requisitos mínimos para acceder a la prestación, pero se requiere la desafiliación del régimen para poder disfrutar de la misma.

Sobre el tema se ha pronunciado en diversas oportunidades la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y ha explicado que la causación y el disfrute de la pensión por vejez son dos figuras jurídicas distintas porque tienen identidad y efectos propios, pues la primera se da desde el momento mismo en que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de semanas cotizadas, y la segunda, o sea, el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, están supeditados a la desafiliación del régimen. También ha dicho la Corporación en mención, que de manera excepcional, cuando en un proceso no exista la prueba de la desafiliación al sistema, ésta puede inferirse de hechos tales como la terminación del vínculo laboral del afiliado, la falta de pago de cotizaciones, el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas, así como la solicitud de la prestación, que no dejen duda de la intención del afiliado de cesar su vinculación al sistema en procura de la obtención del derecho pensional (Sentencias de 1º de febrero de 2011, Radicado 38.776; SL 15091 de 2015; SL 5603 de 2016 y SL 5564 de 4 de diciembre de 2019, Radicado 72.652).

Como se indicó en precedentes el señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo nació el 16 de febrero de 1954, cumplió 60 años de edad en la misma fecha de 2014, y efectuó cotizaciones al sistema general de pensiones con novedad de retiro hasta el 31 de mayo de la misma anualidad, por tanto, conforme a lo antes anotado, a partir de esta última calenda ha de tenerse por retirado del sistema de pensiones.

DE LA PRESCRIPCIÓN DE MESADAS

En lo que respecta a la prescripción, conforme a lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se hace exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador sobre el derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

El artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el mismo texto alusivo a la interrupción de la prescripción.

Según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que esta Sala de Decisión comparte, el análisis consonante de los preceptos lleva a concluir que únicamente es posible interrumpir la prescripción una vez (Sentencia de 21 de febrero de 2012, Radicado 41.908 y SL 374 de 12 febrero de 2020, Radicado 67.868).

En el caso del actor no operó el fenómeno de la prescripción, pues sólo en este juicio se declaró la ineficacia del traslado de régimen para efectos de determinar que le asiste derecho a la pensión de vejez al amparo del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de la misma anualidad y la consecuente reliquidación pensional, lo que significa que antes no le era posible pretender la pensión de vejez de Colpensiones por encontrarse afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), razón por la cual sus mesadas pensionales no se encuentran afectadas por el fenómeno extintivo en comento.

En consecuencia, se tiene como fecha de desafiliación del sistema pensional el 31 de mayo de 2014, y como fecha de disfrute de la prestación, el 1° de junio del mismo año.

Las mesadas pensionales de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 equivalen, en su orden, a \$656.650, \$680.683, \$726.766, \$768.555 y \$799.989.

Por tanto, al demandante le corresponde por retroactivo pensional causado entre el 1° de junio de junio de 2014 y el 15 de febrero de 2016, e incluyendo la mesada adicional de diciembre, la suma de Quince Millones Ciento Noventa y Dos Mil Doscientos Veintiocho Pesos (\$15.192.228), de acuerdo a la liquidación, y como dicho valor no coincide con el liquidado por la A quo, será modificado.

AÑO	IPC	MESADA	NÚMERO DE MESES	TOTAL
2014	3,66%	\$ 656.650	8	\$ 5.253.200
2015	6,77%	\$ 680.683	13	\$ 8.848.879
2016	5,75%	\$ 726.766	1 y 15 días	\$ 1.090.149
TOTAL				\$ 15.192.228

Este monto comprende las mesadas pensionales causadas hasta el 15 de febrero de 2016, porque Colpensiones pagó la prestación a partir del 16 de los mismos mes y año.

Así mismo, por reajuste pensional causado entre el 16 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, la suma de Un Millón Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos (\$1.073.693), de acuerdo a la liquidación que se agrega, monto que se ajusta al liquidado por la Juzgadora de primera instancia, y por ello, será confirmado.

Advierte la Sala que a partir del 1° de enero de 2019 la mesada pensional se reajusta al salario mínimo legal mensual vigente para dicha anualidad.

DE LOS APORTES EN SALUD

Conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, la cotización para salud establecida en el Sistema General de Salud para los pensionados, está en su totalidad a cargo de éstos.

Acorde al criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que esta Sala de Decisión comparte, el descuento por salud constituye una condición esencial y necesaria al reconocimiento de la pensión, que opera por virtud de la Ley y se encuentra estrechamente relacionada con los principios que irradian el Sistema General de Seguridad Social, motivo por el cual el Juez al otorgar el derecho está facultado para autorizarla, porque el pagador de la entidad administradora es el llamado a hacerla efectiva y trasladarla a la EPS correspondiente. (Sentencias de 21 de junio de 2011, Radicado 48.003; 14 de febrero de 2012, Radicado 47.378; 6 de marzo de 2012, Radicado 47.528 y SL 1478 de 9 de mayo de 2018, Radicado 63.512)

En criterio de la Corporación mencionada, de no efectuarse tales descuentos, se desconocerían los principios orientadores de la prestación del servicio público esencial de seguridad social consagrados en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, en especial, los de universalidad y solidaridad, y los rectores del servicio público de la seguridad social en salud de que trata específicamente el Decreto 1920 de 1994. Adicionalmente, tal omisión podría comprometer los derechos de acceso a los servicios de alto costo que requieren un mínimo de semanas cotizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, se autorizará a Colpensiones para descontar tanto del retroactivo como del reajuste pensional reconocido al actor, las sumas que por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud esté en la obligación de trasladar a la EPS de preferencia del pensionado. Por ende, se adicionará en este punto la decisión.

DE LA INDEXACIÓN

La indexación del retroactivo y de la reliquidación pensional reconocidos en favor del accionante, resulta procedente, porque es el mecanismo objetivo de corrección monetaria que se aplica cuando las entidades administradoras que integran el sistema de seguridad social pagan tardíamente las obligaciones a su cargo, y la ley no prevé otra forma de solucionar su detrimento económico. Por lo tanto, se confirmará en este aspecto la providencia.

En consideración a que la indexación se concede en favor del actor, se precisa que sobre la suma que ha de efectuarse el descuento en salud no está sujeta a tal actualización, por tanto, dichos valores no serán objeto de aplicación de la misma, pues no puede el accionante beneficiarse de una actualización con base en una suma dineraria que corresponde al subsistema de salud.

DE LAS COSTAS

Las costas de la primera instancia corren a cargo de Protección y en favor del señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo.

Ante la desventura del recurso de alzada las costas en esta instancia corren en favor del demandante y a cargo de Colpensiones.

Se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.000.000, para esta instancia.

Así las cosas, se confirmará, modificará y adicionará la providencia que se revisa en apelación y consulta.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Adicionar la sentencia de primera instancia así:

Se condena: A Protección y a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., trasladar con destino a Colpensiones, además de los aportes que recibió con motivo de la afiliación del señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo esto es, los dineros que se encuentran en la cuenta de ahorro individual; incluyendo los rendimientos generados por éstos en dicho Fondo; los gastos u cuotas de administración de la cuenta las sumas adicionales de la aseguradora y las sumas dinerarias que correspondan a los descuentos efectuados para la garantía de pensión mínima, por los periodos durante los cuales el accionante permaneció afiliado a cada uno de los Fondos Privados, a la administradora, cuya afiliación es válida, y en caso de que no se hubiere hecho.

SEGUNDO. Condenar a Colpensiones a recibir de Protección y de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., los valores aludidos en el anterior numeral, e incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral del demandante.

TERCERO: Modificar la fecha de causación y el monto del retroactivo pensional, así:

Se condena a Colpensiones a reconocer y pagar al señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo:

- La suma de Quince Millones Ciento Noventa y Dos Mil Doscientos Veintiocho Pesos (\$15.192.228), por retroactivo pensional causado entre el 1º de junio de 2014 y el 15 de febrero de 2016.

CUARTO: Autorizar a Colpensiones para descontar del retroactivo y del reajuste pensional reconocido al demandante, las sumas que por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud esté en la obligación de trasladar a la EPS de preferencia del pensionado, con la aclaración que sobre la suma que ha de efectuarse el descuento en salud no está sujeta a la indexación.

QUINTO: Las costas de la primera instancia corren a cargo de Protección y en favor del señor Carlos Alberto Vanegas Carrillo.

Ante la desventura del recurso de alzada las costas en esta instancia corren en favor del demandante y a cargo de Colpensiones.

Se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.000.000, para esta instancia.

SEXTO: Confirmar en lo demás la decisión que se revisa en apelación y consulta.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

(Con Salvamento de voto Parcial)



SALA LABORAL

REF: ORDINARIO LABORAL

DEMANDANTE: CARLOS ALBERTO VANEGAS CARRILLO

DEMANDADO: PROTECCIÓN S.A. Y COLPENSIONES

RADICADO: 05 001 31 05 019 2017 00496 00

Medellín, dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

FRANCISCO ARANGO TORRES, magistrado de la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, presento SALVAMENTO PARCIAL de voto en la sentencia del proceso de la referencia, en los siguientes términos:

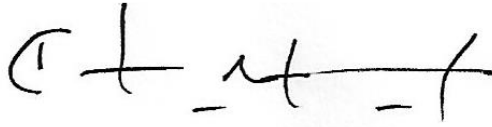
A pesar que acompaño las decisiones de declarar la ineficacia del traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, entendiéndose que ha estado afiliado válidamente a Colpensiones, y de condenar a esta entidad a reconocer y pagar al actor el reajuste de la pensión de vejez, no comparto la decisión de considerar que por efecto de la imprescriptibilidad, de la acción para demandar la ineficacia del referido traslado, ello conlleve, a que los derechos que de la ineficacia se deriven también resultan imprescriptibles.

En mi criterio, es claro, que el demandante siempre ha tenido a su disposición la oportunidad de demandar la ineficacia del traslado de régimen pensional, y si no hizo en tiempo uso de las acciones judiciales para lograrlo, no es factible bajo el argumento que la acción para demandar la ineficacia es imprescriptible, que por ello de contera, se conviertan en imprescriptibles los derechos que de ella se derivan.

Prohijar la tesis de la Sala mayoritaria, conllevaría que por efecto de la imprescriptibilidad de la acción para demandar el reconocimiento de una pensión, o de una reliquidación pensional, el retroactivo que de ello resulte también se convierte en imprescriptible, caso que es similar al que nos ocupa, y que ya ha sido objeto de pronunciamiento de las altas Cortes, en el sentido que si bien la acción para demandar un derecho relacionado con la pensión es imprescriptible, sí prescriben las mesadas a que se tenga derecho.

Conforme lo anterior, en este caso, considero, que como la demanda de ineficacia se presentó el 6 de julio de 2017, las mesadas pensionales causadas con antelación a este mismo día y mes del año 2014, se encontraban afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción, y así se debía declarar.

En los anteriores términos dejo aclarado y salvado parcialmente mi voto.



FRANCISCO ARANGO TORRES
Magistrado

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a7f71a173358bcbc1c5d5731a17894277c3571a6d02df352dcbbf0b98ca8e047**

Documento generado en 16/06/2022 01:31:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>